

0028

AUTOS: “RAMIREZ LINARES, MARIA C/ TRENCO, LAURA - DESALOJO OCUPANTE PRECARIO (ART. 36 DEL D.LEY 14.219). - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD – ARTS. 36 Y 62 DEL DECRETO - LEY 14.219” - FICHA 2-28472/2018.

Suprema Corte de Justicia:

1) El excepcionante sostiene que los arts. 36 y 62 del D. Ley 14.500 confrontan con los arts. 7, 45, 72 y 332 de la Carta, en tanto, afirma, *“...el principio protector (refiere al derecho a la vivienda) está siendo pues flagrantemente violentado por la intimación de desalojo notificada oportunamente”*. A su criterio, dicha medida les coloca *“...en una situación de extrema vulnerabilidad, no esperando otra cosa con esta defensa que salvaguardar la inminente expectativa humana , singular y social-global de la conservación (de) su techo, su vivienda”*.

2) Y bien: a estar a la fundamentación expresada -y que ha sido transcripta en lo medular en el numeral 1) que antecede, el agravio consistiría en la existencia misma de un procedimiento de desalojo que habilita el desahucio de la vivienda en los casos legalmente previstos, lo cual implicaría que -independientemente de la causal en que se fundare- - toda la legislación en materia de arriendos y desalojos sería inconstitucional en tanto habilite una eventual orden judicial de desalojo y posterior lanzamiento del inmueble.

Como puede advertirse de la simple lectura de la defensa interpuesta, dicha fundamentación no posee basamento positivo, sin perjuicio

que la parte no explicita en qué consistiría la incompatibilidad constitucional, más allá que parece entender que el derecho a la vivienda digna constituiría una suerte de prohibición o limitación constitucional para la regulación legislativa en los procesos de desalojo, no siendo posible consagrar institutos como el desalojo o el lanzamiento del arrendatario, lo cual constituye una posición carente de sustento legal.

Por los fundamentos expuestos, esta Fiscalía estima que el excepcionamiento en vista no podrá prosperar, correspondiendo su **rechazo**.

Montevideo, 7 de febrero de 2019.-

MA/ma/sa

Dr. Jorge Díaz Almeida
Fiscal de Corte y Procurador
General de la Nación